**PROPOSICIÓN Nro.**

Por medio de la presente proposición solicitó modificar el Artículo 2 del “**P*ROYECTO DE LEY 185/20 SENADO – 296/20- CÁMARA “POR EL CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROBACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 2021*”,** el cual quedará de la siguiente forma:

**ARTÍCULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES.** Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021 una suma por valor de: **TRESCIENTOS TRECE BILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CATORCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL** ($313.998.014.044.851), según el detalle que se encuentra a continuación:

**(…)**

**Sección 4106**

**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**

Cifras en pesos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NACIÓN** | **PROPIOS** | **TOTAL ASIGNADO** |
| **PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO** |  | **683.411.000.000** | **683.411.000.000** |
| **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN** | **5.232.934.655.000** | **2.109.334.000.000** | **7.342.268.655.000** |
| 4102 Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | 5.111.503.171.453 | 1.769.583.483.547 | 6.881.086.655.000 |
| 1500 Intersubsectorial Desarrollo Social | 5.111.503.171.453 | 1.769.583.483.547 | 6.881.086.655.000 |
| 4199 Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación | 121.431.481.457 | 339.750.516.453 | 461.182.000.000 |
| 1500 Intersubsectorial Desarrollo Social | 121.431.483.547 | 339.750.516.453 | 461.182.000.000 |
| **TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN** | **5.232.934.655.000** | **2.792.745.000.000** | **8.025.679.655.000** |

**Justificación.**

A continuación, se presenta la asignación actual de recursos de inversión del ICBF de acuerdo con la Ley de Presupuesto 2021

**ARTÍCULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES.**

**Sección 4106**

**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)**

Cifras en pesos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NACIÓN** | **PROPIOS** | **TOTAL ASIGNADO** |
| **PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO** |  | **683.411.000.000** | **683.411.000.000** |
| **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN** | **3.832.778.161.060** | **2.109.334.000.000** | **7.342.268.655.000** |
| 4102 Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias | 3.981.778.161.060 | 1.769.583.483.547 | 6.091.112.161.060 |
| 1500 Intersubsectorial Desarrollo Social | 3.981.778.161.060 | 1.769.583.483.547 | 6.091.112.161.060 |
| 4199 Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación |  | 339.750.516.453 | 339.750.516.453 |
| 1500 Intersubsectorial Desarrollo Social |  | 339.750.516.453 | 339.750.516.453 |
| **TOTAL PRESUPUESTO SECCIÓN** | **3.981.778.161.060** | **2.792.745.000.000** | **6.774.523.161.060** |

**Recursos asignados 2021.**

Se solicita el incremento de presupuesto necesario en todos los proyectos de inversión de la entidad que presentan déficit respecto a la solicitud del anteproyecto de inversión 2021 radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Esto corresponde a una asignación adicional de recursos de fuente nación por **$1.251.156 millones**, con el siguiente detalle por proyecto de inversión:

Cifras en millones de pesos



Para la vigencia 2021, se presenta una disminución del presupuesto del Instituto del 6% en términos reales (pasando de $6,9 billones en 2020 a $6,7 billones en 2021), lo que tiene implicaciones principalmente en la atención de las responsabilidades asignadas por la Constitución Política y la Ley, en materia de la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias; contando, además, con población especialmente vulnerable como menores de edad en primera infancia o con sus derechos amenazados o vulnerados. Adicionalmente, para el 202, el Instituto asumirá el reto de la ejecución de la política de adolescencia y juventud, que se materializará con la implementación de la estrategia “Sacúdete”, que busca contribuir al cierre de brechas y la promoción de la equidad; lo cual, podría verse afectado a partir de la disminución de recursos antes señalada.

El premio Nobel de Economía del año 2000 James Heckman, argumenta que existe una correlación directa entre la inversión en la primera infancia, la niñez y la adolescencia con el desarrollo económico y social de un país. En ese sentido, dos de los problemas sociales que afectan la productividad de una sociedad y el crecimiento económico, son el crimen y las habilidades de la fuerza laboral. En efecto, las intervenciones dirigidas a niños de temprana edad que mejoren sus habilidades cognitivas y no cognitivas son soluciones costo-eficientes que permiten atacar estos problemas (J. J. Heckman & Masterov, 2007, pp. 448–449).

El gasto de la Nación en proyectos sociales dirigidos a NNA es una inversión que contribuye al bienestar de la sociedad en general y su no priorización implicaría perder la senda de crecimiento económico hacia el futuro. En tal sentido, Heckman & Masterov, (2007) señalan que las intervenciones realizadas en Estados Unidos, en las que se ofrecen programas de preescolar a niños de familias menos favorecidas muestran que, en su vida adulta, estos niños tienen mejores resultados sociales y económicos que los niños no incluidos en los programas: 1) en términos educativos se desempeñan mejor en el colegio, tienen menor probabilidad de desertar de la secundaria y mayor probabilidad de asistir a la universidad; 2) en términos sociales tienen menor probabilidad de ser beneficiarios de programas de asistencia social, ser madres adolescentes, fumar o usar drogas.

En Colombia los derechos de los niños, las niñas y adolescentes han sido consagrados al más alto nivel normativo. En este sentido, tanto la Constitución Política[[1]](#footnote-1), como los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad[[2]](#footnote-2), reconocen la especial protección que tienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes; imponiendole al Estado, una especial obligación de respeto y garantia, lo cual comporta la necesidad de consultar el interés superior del niño en cualquier determinación que se tome por parte de la administración. En el nivel legal, la Ley 1098 de 2006[[3]](#footnote-3) señala que estos derechos son fundamentales y establecen su prevalencia sobre los de los demás, comprometiendo al Estado, la familia y la sociedad a ofrecer todas las garantías y oportunidades a esta población, para el pleno ejercicio de sus derechos.

La prevalencia de los derechos de los niños, establecida en el artículo 44 de la Constitución Política, se aplica y extiende necesariamente a todos los ámbitos del Estado colombiano, incluido el presupuestal. Ello implica que los recursos destinados a la atención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes colombianos deben garantizar la razonabilidad en su destinación y un aumento sostenido en el corto, mediano y largo plazo, pues lo contrario, generaría inevitablemente una desmejora en la protección de derechos que por su naturaleza son especialmente garantizados por el Estado.

Esa directriz está estrechamente atada al cumplimiento del artículo 13 Superior, que establece la obligación del Estado de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. En esta línea, los artículos 334, 350 y 366 de la Carta establecen que el gasto público social es prioritario, e, incluso, en el parágrafo del primero se concreta que no es posible invocar la regla de sostenibilidad fiscal para restringir la protección de derechos fundamentales.

En concordancia con lo anterior, el artículo 25 de la Ley 1804 de 2016 indica que los recursos presupuestados anualmente para la implementación de la Política de Primera Infancia “***no podrán ser menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior****. La proyección de recursos se hará sobre la base de las metas de cobertura y gestión que se definan en el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia*” (Se resalta).

Así mismo, una de las líneas del Pacto por la Equidad, contenida dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, fue determinada bajo la directriz denominada *Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia*. De manera que no sería coherente con el Plan Nacional de Desarrollo disminuir el presupuesto de la Entidad cuya misionalidad apunta a la protección de esta población, pues esto implicaría afectar negativamente las metas establecidas en la Ley 1955 de 2019.

No debe perderse de vista que, además de una coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo, por mandato del artículo 93 de la Constitución Política de 1991[[4]](#footnote-4), el Estado debe atender las obligaciones asumidas en el marco de los tratados internacionales de los cuales hace parte, so pena de incurrir en una responsabilidad internacional, quepueda llevarlo a una condena en instancias internacionales. A manera de ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, en su artículo 4°:

*“Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. (Copiado del Texto Original).*

Al ratificar este instrumento, el Estado colombiano asumió, en virtud del derecho internacional, la obligación de aplicar en su integridad los preceptos que esta contiene atendiendo la efectividad de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, lo cual implica un compromiso prioritario con la materialización paulatina de sus atribuciones, lo que debe articularse en todo tiempo con toda la legislación interna. Situación que puede replicarse, por ejemplo, con lo previsto en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se impone a los Estados el deber de tomar todas las medidas de protección que su condición de menor de edad requieren.

Asimismo, entendiendo que muchos de los programas de la Entidad también apuntan a la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, debe respetarse el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales[[5]](#footnote-5).

Resaltando la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los menores, la OCDE (2020) ha reconocido los logros de Colombia en materia de la atención a la Primera Infancia, particularmente en el contexto de manejo de la emergencia por el COVID-19. Se ha destacado la implementación por parte del ICBF de la estrategia de “Mis Manos te Enseñan” mediante la cual se brinda acompañamiento pedagógico, nutricional y psicológico y se promueve el desarrollo integral de la primera infancia, para evitar un impacto negativo en el desarrollo integral de los niños y niñas más vulnerables del país.

Finalmente, considerando que la misionalidad del ICBF está dirigida a garantizar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residan en el territorio nacional, una disminución en el presupuesto de la Entidad genera una limitación y precarización de los servicios que presta el Instituto, lo que conlleva un retroceso en la garantía los derechos, afectando el cumplimiento de los principios de carácter constitucional previamente citados.

Para reflejar el calado de los impactos del déficit de presupuesto por proyecto de inversión, a continuación, se señalan los planes que se tienen para esos recursos dejados de percibir en 2021.

* **APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL** rubro 4102-1500-18 por valor de $351.474 millones, recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas institucionales del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en relación con el logro de la meta de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia, cualificación de madres comunitarias y madres gestantes atendidas en los servicios de primera infancia; así como, los compromisos establecidos en el Plan Marco de Implementación de Paz en relación al cumplimiento de la meta de “cobertura universal de atención integral para niños y niñas en primera infancia en zonas rurales”.

La no asignación del total de los recursos solicitados para la vigencia 2021, implicaría uno de estos dos tipos de impactos: i) mantener todos los cupos de atención de 1.760.888 (1.454.133 con Educación Integral y 306.755 en Servicios Comunitarios), pero garantizando la operación de los servicios integrales y convenios sólo hasta el 31 de octubre de 2021, con impacto en la calidad en la prestación del servicio; o ii) afectar la cobertura de los servicios integrales y comunitarios, disminuyendo 93.036 cupos de la atención en las diferentes modalidades, lo cual impactaría negativamente el cumplimiento de la meta estratégica de 2021 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 de 1.454.133 de niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia.

* **PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS A NIVEL NACIONAL rubro** 41021500-14 por valor de $ 480.517 millones, recursos necesarios para atender las modalidades de restablecimientos de derechos de niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados o vulnerados. Con una reducción de los recursos, solo se logra una atención hasta el 31 de mayo de 2021 de 50.921 cupos de las modalidades de atención, y 32.621 sesiones de apoyo psicológico especializado, y el acompañamiento de 113 Unidades Móviles hasta 15 de mayo 2021.

En esta misma línea, se verían afectados el fortalecimiento de las defensorías de familia, y los equipos psicosociales que los acompañan, y las herramientas administrativas y tecnológicas que se requieran para la prestación del servicio, así como el fortalecimiento y ampliación de los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI) del ICBF, los cuales atienden las situaciones potenciales de vulneración de derechos. Siendo estos dos compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

* **FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL** rubro C-4102-1500-13 por valor de $ 88.687 millones, recursos necesarios para cumplir los compromisos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, relacionados con el fortalecimiento de los servicios y el rediseño del modelo para la atención de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA, el cual, propone ajustes para realizar una atención especializada, individualizada, diferenciada con un componente pedagógico – restaurativo, lo que implica fortalecer los equipos psicosociales y reconocer su nivel de cualificación, orientado a que los niños, niñas y adolescentes construyan proyectos de vida legales y sostenibles a partir de la exploración y potenciación de sus talentos e intereses, que evite la reincidencia en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, o en la edad adulta la justicia ordinaria.

En este sentido, además de verse afectados el cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo ya mencionados, con los recursos asignados sólo se podrá garantizar la operación de las modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente hasta el mes de agosto de la vigencia 2021.

* **FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL** rubro C-4102-1500-16 por valor de $ 76.335 millones, recursos necesarios para desarrollar dos apuestas enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo. La primera, es Mi Familia, un programa de acompañamiento familiar psicosocial enfocado en el fortalecimiento de las capacidades familiares para promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y contribuir a la equidad de oportunidades. La segunda, la generación de acciones diferenciadas que creen condiciones de equidad de oportunidades a los grupos étnicos.

La reducción presupuestal se traduciría en la disminución del 8% en la atención de familias, con respecto a la atención de 2020, toda vez que sólo sería posible atender a 59 mil familias; y con respecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo implicaría dejar de atender a 25 mil familias, lo que genera un déficit de atención del 30%. Esta reducción es especialmente importante, teniendo en cuenta la coyuntura de pandemia actual porque la población objetivo de Mi Familia tiene mayor riesgo de caer en pobreza y de incurrir en vulneraciones de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De hecho, Mi Familia constituye una oferta pertinente para la etapa de recuperación social y económica que tendrá que enfrentar el país durante el 2021 porque, de acuerdo con UNICEF (2020) existe un aumento de los *“Riesgos de maltrato, violencia, explotación y estrés psicosocia*l” este tipo de acompañamiento evita que se materialicen los riesgos en vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes.

* **CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL** rubro C-4102-1500-12 por valor de $ 10.000 millones, recursos necesarios para alcanzar una cobertura de 12 meses para la modalidad de Centros de Recuperación Nutricional, que tiene por objetivo la recuperación del estado nutricional de niñas y niños menores de 5 años.

Cobra relevancia esta modalidad teniendo en cuenta lo señalado Programa Mundial de Alimentos en el sentido que la pandemia causada por el COVID-19 repercutirá́ en un incremento del hambre y la pobreza en los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); se estima que la pandemia sumará 20 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Colombia, incluida en esta instancia, no podría ser la excepción por lo que se deben impulsar acciones que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional de las familias afectadas por la pandemia.

* **FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BINESTAR FAMILIAR EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS A NIVEL NACIONAL** rubro C-4102-1500-15 por valor de $ 3.359 millones, recursos requeridos para fortalecer el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN), para poder dar cumplimiento a lo pactado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de estructurar “un esquema de evaluación de la política que fortalezca el seguimiento de la garantía de derechos a través del Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN)” a través del diseño de tableros de control para las políticas públicas dirigidas a la niñez en el marco de la Mesa SUIN. Estos recursos nos permitirán buscar una interoperabilidad entre todas las herramientas de la Dirección del Sistema Nacional de bienestar Familiar que fortalecerá este seguimiento a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

* **DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL RECONOCIMIENTO, GARANTÍA DE SUS DERECHOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIDA A NIVEL NACIONAL** rubro C-4102-1500-19 por valor de $ 119.353 millones, recursos necesarios para dar cumplimiento a la meta institucional del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la estrategia de desarrollo naranja, en donde se tiene programado ampliar la meta de atención de 2021 pasando de 250.000 en 2020 a 325.000.

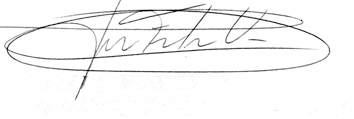
Por otro lado, también se verían afectados los compromisos relacionados con la formulación del capítulo étnico de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y la implementación de las líneas de política para la prevención del trabajo infantil y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes- ESCNNA, así como la ampliación y cualificación de la atención para la promoción de derechos sexuales, la participación y la prevención de vulneraciones como la ESCNNA, violencia sexual, violencias al interior de la familia, alta permanencia en calle, atención a la población migrante y riesgos digitales.

* **FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL** rubro C-4199-1500-7 por valor de $ 7.924 millones, recursos necesarios para disminuir el déficit de obsolescencia del parque computacional que actualmente alcanza un nivel del 65%. Adicionalmente, se apunta a la transformación digital en los servicios misionales del ICBF, conforme a los lineamientos de MinTIC, que incluye intervención de aplicaciones y medios tecnológicos que habilite las capacidades para apalancar el uso de la tecnología emergentes interviniendo o modificando los procesos, productos y servicios, mejorando el funcionamiento de la entidad y la interacción con los ciudadanos a través de lo digital y se apunta a implementar y dar sostenibilidad de los servicios de alojamiento de infraestructura – Nube Hibrida-

De otra parte, la coyuntura generada por la pandemia del COVID 19 ha evidenciado la necesidad de fortalecer la infraestructura de comunicaciones y encaminar esfuerzos para actualizar el servicio de telefonía IP y comunicaciones unificadas para todas las sedes del instituto a nivel nacional, la cual se encuentra obsoleta y es necesario hacer en cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, con la actualización del Protocolo IPV4 a IPV6.

* **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL** rubro C-4199-1500-8 por valor de $ 113.507 millones, recursos requeridos principalmente para modernizar la infraestructura del ICBF que no cumplen con las normas de sismo-resistencia y de seguridad en la atención de nuestros beneficiarios. Se han identificado más de 12 infraestructuras que deben ser construidas nuevamente porque no cumplen con los lineamientos para la correcta y segura atención, 73 infraestructuras, entre sedes y Centros Zonales, que requieren adecuaciones y ampliaciones.





**Juan Felipe Lemos Uribe Juan Samy Merheg Marún**

**Senador de la República Senador de la República**

1. ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

   La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

   Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. [↑](#footnote-ref-1)
2. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, entre otros, imponen al Estado la obligación de tomar medidas especiales de protección de los derechos de los menores de edad. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículos 7, 8, 9 y 10 [↑](#footnote-ref-3)
4. “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

   Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” [↑](#footnote-ref-4)
5. En Sentencia C 228 de 2011, La Corte Constitucional declaró: “El principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (…) El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. [↑](#footnote-ref-5)